El Ejército Republicano Irlandés: Soldados Ilegítimos

Coronel (R) Michael F. Noone, hijo, Fuerza Aérea de los EE.UU.

Hace ya mucho tiempo que las Declaraciones de Guerras han pasado de moda. No obstante, cuando todos los participantes reconocen un estado de guerra, no consideran a los soldados que matan civiles inocentes (bombardeos) como asesinos. Asimismo, hasta pueden ser otorgados condecoraciones militares. Si el enemigo los captura, tienen el derecho de ser tratados no como criminales sino como una categoría especial de prisioneros de guerra.

No obstante, ¿qué ocurre cuando un participante cree que existe un estado de guerra y el otro no? El IRA [Ejército Republicano Irlandés] sí cree que existe un estado de guerra en contra del Reino Unido y habla en términos apropiados para tal estado de guerra—haciendo referencia a "treguas" y "nuevas hostilidades." Nosotros, por otro lado, negamos que exista un estado de guerra. Condenamos a los terroristas que colocan bombas como asesinos así como cualquier persona que asesina.

¿Entonces, quién decide acerca de la existencia de un estado de guerra cuando los mismos partidos no están de acuerdo? Actualmente, lo contrario es aparente en una protesta… en contra del trato especial o privilegiado otorgado a un gran número de prisioneros en Irlanda del Norte que fueron condenados a cumplir largas sentencias debido a sus delitos "comunes" dentro de una de nuestras prisiones de alta seguridad principales…

—Lady Wooton of Abinger[1]

CUANDO EL gobierno británico aplicó las tácticas de contrainsurgencia, que fueron desarrollados en sus colonias, a la violencia política durante *The Troubles* [el violento conflicto entre grupos paramilitares en Irlanda del Norte] en la década de los 70, surgieron algunos problemas legales.[2] El *IRA* afirmó que estaba en un estado de guerra con Gran Bretaña. ¿Era cierto? ¿Si lo es, cuáles derechos podía reclamar y qué obligaciones debía? Si *The Troubles* no fue una guerra legalmente definida, ¿cuáles eran las consecuencias legales, y quién las definía? Fundamentalmente, la Corte Europea de Derechos Humanos revisó las tácticas del Gobierno británico.[3] El fallo de la corte—que solamente se aplica a los estados dentro de su jurisdicción—sirve como punto de referencia para evaluar las prácticas de los EE.UU. y enfatiza la disparidad entre la ley respecto a los derechos humanos durante tiempo de paz y la ley humanitaria durante tiempo de guerra. Las FF.AA. consideran esta disparidad como importante en particular debido a su guerra actual en un ambiente que está legalmente mal definido. Las FF.AA. norteamericanas que están en realidad combatiendo en un ámbito legal mal definido han sido criticadas por no acatar el imperio de la ley.

The Troubles

Cada agosto, la mayoría protestante en Londonderry, Irlanda del Norte conmemora la victoria de los protestantes en contra del Ejército invasor católico de Rey James II en 1689. Se celebró la

culminación de *The Marching Season* [Las Fiestas de Marchar] de 1969 por medio de una gran reunión de protestantes que marcharon hasta las murallas de la ciudad para tirar monedas al área católica de Bogside. Los católicos (cuyas marchas tradicionales fueron prohibidas ese año) respondieron echando piedras, ladrillos y bolitos empleando un tirachinas.[4]

Los intentos policíacos de dispersar el motín fracasaron. Al día siguiente, se realizaron otras manifestaciones católicas similares por todas partes de la provincia, caracterizadas por la construcción de barricadas, ataques en contra de puestos policíacos y la disrupción del transito de vehículos. Subsecuentemente, se desplegaron tropas [británicas] para mantener el orden público mientras se llevaban a cabo batallas campales entre pandillas católicas y protestantes. Originalmente, la comunidad católica dio la bienvenida a la intervención del Ejército [de Gran Bretaña] debido a la percepción que era un grupo políticamente neutral, a diferencia de la *Royal Ulster Constabulary* [*RUC*-Fuerza Policíaca Real de Ulster] que era primordialmente protestante y era considerado como partidario del estatus quo.

¿Entonces, quién decide acerca de la existencia de un estado de guerra cuando los mismos partidos no están de acuerdo? Actualmente, lo contrario es aparente en una protesta en contra del trato especial o privilegiado otorgado a un gran número de prisioneros en Irlanda del Norte que fueron condenados a cumplir largas sentencias debido a sus delitos "comunes" dentro de una de nuestras prisiones de alta seguridad principales… —Lady Wooton of Abinger

La actitud de la comunidad compuesta por las minorías hacia el Ejército sin embargo cambió cuando se dio cuenta de que su misión era la de mantener el Gobierno unionista protestante. Entretanto, en enero de 1970, integrantes del *IRA* que apoyaban la violencia abandonaron la organización principal para formar el Provisional *IRA*. Sus integrantes, los Provos dirigieron la violencia en contra del Gobierno unionista, el Ejército y la policía. La comunidad protestante respondió por medio de la creación de sus propios grupos paramilitares. Se aumentó la violencia. Llegó a un clímax un Domingo conocido como *Bloody Sunday* [el Domingo Sangriento—el 30 de enero de 1972], cuando (basado en circunstancias aún en disputa) paracaidistas dispararon sobre una multitud en Bogside. Mataron a 13 personas de menos de 19 años e hirieron a 13 adultos, incluyendo una mujer. En 1984, cuando el Ejército cesó de efectuar operaciones principales en Irlanda del Norte, el número de muertos incluía 377 soldados del Ejército y 146 integrantes del Regimiento de Defensa de Ulster (como la Guardia Nacional). Asimismo, murieron 198 policías y 1.668 civiles.

Cuando la violencia política consigue un cierto nivel de intensidad, el gobierno debe responder dos preguntas fundamentales: ¿Deben las FF.AA. apoyar o reemplazar la policía? ¿Debe el sistema penal ser complementado, de una manera u otra, por medidas extraordinarias?

Una respuesta afirmativa a la primera pregunta produce consecuencias legales. Si se transforma el disturbio político en guerra civil, luego "la ley consuetudinaria de la guerra se vuelve aplicable… al reconocer a los rebeldes como beligerantes."[5] La ley nacional los puede definir como traidores, pero cuando otros estados reconocen su estatus de beligerante y obedecen las leyes de guerra, entonces los combatientes rebeldes quizás pueden demandar las protecciones legales de guerra.[6] Por supuesto, ambos lados consideran el reconocimiento internacional como una forma de aprobación de los rebeldes como beligerantes.

Si no se reconocen a los rebeldes como beligerantes legales (lo cual raramente ocurre), la ley internacional reconoce un estado de insurgencia que quizá podría resultar en consecuencias legales nacionales e internacionales. Si—mediante sus esfuerzos para reemplazar el gobierno—los insurgentes observan las leyes de guerra (y raramente la cumplen), la comunidad internacional espera que el gobierno los trate de manera humanitaria, aunque la ley nacional los trataría como rebeldes.[7] Se considera la violencia política que aún no ha alcanzado el nivel de insurgencia como una forma inferior de agresividad.

La ley nacional ignora la motivación y otorga las mismas protecciones legales que otorga a los criminales comunes (tal vez modificadas durante un estado de excepción) a aquellos que se involucran en violencia política. En cuanto a los insurgentes,

la ley internacional humanitaria espera que los autores de violencia política sean tratados de manera humanitaria. Por ende, los rebeldes deben adherirse a las leyes internacionales para que puedan exigir tales protecciones. Si no cumplen con este requisito, la ley internacional de derechos humanos (los estandartes en tiempos de paz) aún los protegerán a un nivel mínimo. Asimismo, los agentes del estado (soldados y policías) están obligados a obedecer las leyes nacionales.

Durante *The Troubles*, los cortes nacionales acusaron a los soldados británicos de homicidio involuntario si aplicaban una fuerza letal "sin razón válida," aun si sus victimas cometían o parecían cometer actos violentos.[8] Bajo los reglamentos de guerra, los cortes condenarán un soldado que abre fuego solamente si mata a una persona que tiene una protección legal (un no beligerante), cuando dispara de manera sin distinción o cuando puede emplear una arma inofensiva.[9] La orden de disparar para matar un adversario es legal durante operaciones en tiempos de guerra. La orden es ilegal si el soldado cumple con deberes policíacos. Un analista de la presunta "guerra secreta" pregunta: "¿Por qué están las fuerzas de seguridad en el lugar del incidente? Si es como consecuencia de un ataque terrorista tal vez existen otras formas de detener tal ataque que evitan una confrontación armada.

"Una vez que se inicia una confrontación entre soldado o policía y terroristas, ¿acaso es necesario disparar armas? Depende de que si los terroristas están armados y de que si han sido avisados acerca del inminente empleo de fuerza."

"Por último, una vez que los soldados y la policía deciden abrir fuego ¿cómo apuntan las armas? ¿Acaso se ordena a los soldados o policías disparar para dañar órganos vitales y mantener el fuego hasta que el blanco sea aniquilado o existen otras formas de usar armas? Respecto a la última pregunta—de disparar para aniquilar (en el verdadero sentido de la palabra)—nunca se ha puesto en duda que el entrenamiento de policías y soldados enfatiza la necesidad de disparar para matar en el momento en que el que dispara se encuentra en gran peligro. Por ende, las investigaciones suelen enfocarse en los elementos de disparar para matar."[10]

Estas preguntas son inconcebibles si son planteadas a un soldado confrontando un adversario durante una guerra. El soldado no necesita considerarse en peligro. El *IRA* y sus partidarios emplean términos apropiados de guerra, hablando de treguas y de reanudar las hostilidades. Sin embargo, los críticos de las políticas británicas en Irlanda del Norte insistieron que no se aplicaban los Convenios de de Ginebra en esta situación: "Es importante subrayar que no existe ningún estado de guerra ni conflicto armado oficialmente en Irlanda del Norte…si las leyes de guerra fueran aplicables, la pertinente norma de revisión legal referente a algunos incidentes de empleo de fuerza letal serían los Convenios de Ginebra…"[11] Por ende, al pedir el apoyo del Ejército para efectuar deberes policíacos, ni el gobierno ni el *IRA* sostuvieron que los Convenios de Ginebra eran aplicables en las decisiones de emplear fuerza letal. La ley humanitaria nacional británica e internacional determinó el criterio de su uso.

Durante la cumbre de la violencia durante la década de los 70 ¿Podrían los Provos exitosamente haber demandado las protecciones de la ley de guerra, específicamente de los Convenios de Ginebra? ¿Si no, cuales serían las consecuencias de esto? Los Convenios de Ginebra requieren la existencia de un conflicto—una guerra. Tradicionalmente, una guerra es "una competencia violenta conducida apropiadamente entre FF.AA. publicas."[12]

Cuando la violencia política consigue un cierto nivel de intensidad, el gobierno debe responder dos preguntas fundamentales: ¿Deben las FF.AA. apoyar o reemplazar la policía? ¿Debe el sistema penal ser complementado, de una manera u otra, por medidas extraordinarias?

Aunque los Provos estaban armados, no se los consideraba ser fuerzas públicas debido a su estatus de protagonistas no estatales. Sin embargo, el Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra declara que todos respetarán las reglas básicas humanitarias en conflictos internos [guerras civiles, insurgencias, etcétera].[13] Al explicar estas disposiciones, R. T. Yingling y R. W. Ginnane sostiene que ciertas acciones (como el homicidio, tortura, mutilación), que probablemente ya no serían realizadas por un estado civilizado, fueron renunciadas.[14]

Los Convenios de Ginebra, juntos con las prácticas tradicionales, constituyen la ley humanitaria internacional—la ley de conflicto armado. El Artículo 4 del Tercer Convenio de Ginebra declara:

Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo:

1) los miembros de las FF.AA. de una Parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas FF.AA.;

2) Los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones:

a) Estar mandados por una persona que responda de sus subordinados;

b) Tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia;

c) Llevar las armas a la vista;

d) Dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra;

3) Los miembros de las FF.AA. regulares que sigan las instrucciones de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la potencia detenedora…"[15]

No se pueden clasificar a los presuntos miembros del *IRA* en ninguna de las categorías debido a que:

• No eran miembros de las FF.AA. de ninguna de las partes involucradas en el conflicto (si fue en realidad un conflicto).

• No son 'miembros de una fuerza armada profesional, aunque (tal vez) "profesaron lealtad a…una autoridad no reconocida [por Gran Bretaña]."

• No son habitantes de un territorio ocupado, que… salieron a la defensa de una manera espontánea a resistir las fuerzas invasoras."

Tampoco se clasificaron bajo el Artículo 3 ya que tal Artículo, común a todos las cuatro Convenios de Ginebra, declara: En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las FF.AA. que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) la toma de rehenes;

c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;

d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.[16]

Suponer que *The Troubles* fue una forma de conflicto armado no de carácter internacional (un hecho que disputa el gobierno de Su Majestad), los presuntos miembros del *IRA* no podían afirmarse ser "personas que no toman parte activa en hostilidades" o "miembros de las FF.AA. que rindieron sus armas."[17]

¿Qué hay acerca de las consecuencias legales en usar medidas legales extraordinarias para responder a la violencia política? Los sospechosos miembros del *IRA* acusados de crímenes podrían demandar los derechos garantizados a personas acusadas por el sistema judicial nacional y por la ley internacional de derechos humanos. ¿Cuáles derechos podrían demandar los detenidos—estas personas que fueron simplemente detenidas por supuestamente estar afiliadas con los Provos? Su estatus legal determinó cuales derechos nacionales e internacionales tenían.

El proceso Kelly v. Faulkner and Others ejemplifica las consecuencias legales de la Operación *Demetrius*, el nombre codificado de las redadas sincronizadas en toda la provincia efectuadas por el Ejército el 9 de agosto de 1971 para arrestar y detener a 500 Provos sospechosos.[18] Kelly, uno de los detenidos en las redadas, subsecuentemente presentó una demanda en contra de oficiales gubernamentales por haber sido ilegalmente arrestado y detenido. El internamiento fue autorizado por la Ley de Autoridades Civiles (Poderes Especiales-Irlanda del Norte) de 1922 y la regulación 11 (1). Los dos documentos legales permitieron a "cualquier… miembro activo de las Fuerzas de Su Majestad, al presentarse la situación, arrestar sin orden de detención cualquier persona que está bajo sospecha de efectuar o haber efectuado o en el momento antes de efectuar una acción que perjudique la preservación de la paz o el orden…"[19] El Ejército se basó en esta provisión

cuando detuvo a Kelly. No le informó las razones de su arresto como así tampoco lo hizo la policía más tarde aquel día. Después de dos días, el 11 de agosto de 1971, Kelly se enteró de las razones, cuando le entregaron una copia de la orden de detención. La orden indicaba que él fue arrestado bajo las disposiciones de la Ley de Poderes Especiales por ser una persona bajo sospecha. Debido a que el Ejército no les entregaba a las autoridades civiles de una manera apropiada, Kelly fue capaz de presentar una demanda debido al plazo que ilegalmente permaneció en custodia.[20]

Si se hubiese emitido una orden legal de arresto ¿cuáles derechos hubiese tenido el detenido (o el internado)?[21] Unos veinte años después de efectuar la Operación *Demetrius*, los editores de un libro que investiga las prácticas preventivas (es decir, no punitivas) en países en donde existen derechos consuetudinarios (como los EE.UU. y Gran Bretaña) observaron que "una característica sorprendente… es la falta casi total de disposiciones que tratan específicamente con el trato de detenidos."[22] Los detenidos de Irlanda del Norte de hecho tenían muchos derechos. El proceso de Kelly ejemplifica el derecho que tienen los detenidos en presentar demandas en contra de un oficial del gobierno debido a los resultantes daños y perjuicios causados por ser ilegalmente encarcelados. Pueden emplear el mandato judicial de habeas corpus para cuestionar la legalidad de detención. La razón no era un aspecto esencial en el acto de detener sospechosos. Se limitaron las demandas de un detenido hasta tal punto que el detenido solamente podía cuestionar si la detención fue efectuada mediante la mala fe o consideraciones intrascendentes.[23]

En noviembre de 1972, la Detention of Terrorists Order [Orden referente a la Detención de Terroristas] abolió el internamiento y estableció medidas cuasi-judicial que permitía a un detenido tener un abogado y cuestionar los fundamentos de su detención.[24] El Ejército no tomó parte en aquellas medidas. Sin embargo, jugó un rol principal en implementar la decisión de aplicar técnicas coercitivas de interrogación, que el Ejército describió como "interrogación a fondo."[25]

Se desarrollaron las técnicas basadas en las experiencias de prisioneros británicos que fueron interrogados por los chinos y norcoreanos durante la Guerra de Corea. Se enseñaron las técnicas de interrogación en la Escuela de Inteligencia de Servicios Conjuntos. Los integrantes en el *SAS* [Servicio Especial Aérea] y tripulantes aéreos de la Fuerza Aérea Real aprendieron cómo resistir las técnicas. En su libro, *Pig in the Middle: The Army in Northern Ireland 1969-1984*, el autor Desmond Hamill escribe: "Utilizaron las técnicas en Adén, en donde surgieron escándalos y suscitaron alegaciones de tortura. Hubo una investigación y se revisaron las reglas que gobernaban el uso de estas técnicas… Las técnicas llegaron a ser usadas en Irlanda del Norte [y] se concordó que la *RUC* requería el entrenamiento [para efectuar interrogaciones]. Decidieron que el Arma de Inteligencia del Ejército proporcionaría el entrenamiento, pero no participaría en las interrogaciones."[26]

Doce de los detenidos del 9 de agosto fueron sujetos de una interrogación a fondo. En su libro *The Guinea Pigs*, John McGriffin describe algunas prácticas muy comunes: los detenidos permanecieron parados en posición de estrés frente a una pared; encapuchados; sometidos a un ruido exageradamente fuerte; privados de sueño, de comida y de bebida.[27] Otras dos supuestas prácticas eran las de poner a unos detenidos encapuchados en helicópteros, para crear la impresión de estar en el aire, y luego echarlos a empujones; y también forzar a los detenidos a correr baquetas de unos policías.

Estas preguntas son inconcebibles si son planteadas a un soldado confrontando un adversario durante una guerra. El soldado no necesita considerarse en peligro. El IRA y sus partidarios emplean términos apropiados de guerra, hablando de treguas y de reanudar las hostilidades. Sin embargo, los críticos de las políticas británicas en Irlanda del Norte insistieron que no se aplicaban los Convenios de de Ginebra en esta situación.

Una subsiguiente investigación del gobierno falló en indicar cual era la agencia responsable de mandar y realizar las interrogaciones (el Ejército o la fuerza policíaca civil).[28] Es cierto es que oficiales de la arma de inteligencia del Ejército entrenaron a los interrogadores en usar las prácticas que fueron descritas como crímenes de guerra cuando las usaron en contra de personal de las Fuerzas ONU

en Corea. Asimismo, personales de aviación del Ejército probablemente participaron en los "vueltos" de helicópteros. Estas practicas fueron condenadas después de al Guerra de Vietnam, en que se entablaron las FF.AA. norteamericanas.

La ley y la guerra

Este artículo trata de categorías legales: la guerra y la paz, los combatientes legales e ilegales y los derechos que pueden demandar. Si se hubiera aceptado la declaración del *IRA* que estaba en estado de guerra, entonces se podía disparar a sus "soldados" sin previo aviso. Si fueran capturados, quizás podrían haber sido otorgados el estatus de prisioneros de guerra (*POW*) y demandar la protección en contra de interrogaciones que el Artículo 17 otorga en el Tercer Convenio de Ginebra: "No se puede infligir ninguna tortura física ni mental, ni efectuar cualquiera forma de coacción a prisioneros de guerra para recolectar cualquier tipo de información. No se puede amenazar, insultar ni maltratar de cualquiera forma a ningún prisionero de guerra que rechaza dar información. "[29] Sin embargo, no fueron *POW*. No se aplicaron las disposiciones del Convenio, sino que se aplicó la Ley de Derechos Humanos. Gran Bretaña firmó el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que prohibía la tortura y el trato cruel y degradante.

En el caso Ireland v. United Kingdom, la Corte Europea de Derechos Humanos, al oír las demandas de los "12 del 9 de agosto," empleó los mismos análisis legalistas que se usan actualmente en la Administración de Bush. Concluyó la corte que las prácticas no constituían tortura sino trato cruel y degradante. Adjudicó a favor de los demandantes.[30] Ningún oficial británico, militar ni civil, fue castigado.

Hemos observado que se midió la utilización de fuerza letal de soldados mediante las normas legales de civiles y que fueron sometidos a procesos judiciales debido a una desviación de las normas establecidas en el Manual de Ley Militar de 1968. El manual autoriza a "cualquier persona usar la fuerza que se necesite en las circunstancias para prevenir crímenes." Supuestamente, se otorgarían al soldado la libertad para determinar la medida de fuerza letal a usar y cuando usarla—si no existen otras alternativas. Se limitó esta norma por medio de las supuestas Cartas Amarillas que los soldados llevaban, cuya intención era restringir el uso de fuerza letal sin un desafío preliminar y en situaciones "cuando una persona está cometiendo o pretende cometer un acto que probablemente pondría en peligro una vida o cuando no existen alternativas para prevenir el peligro."[31]

Los grupos de *SAS* que en operaciones clandestinas de vigilancia opinaron que este requerimiento era excesivo—existen pruebas de perjurio en procesos judiciales subsecuentes. Debido a las amenazas de interponer una acción judicial, "los oficiales de Servicios Legales del Ejército estaban específicamente entrenados para interpretar la ley de fuerza mínima reuniéndose rutinariamente con los soldados antes de ser entrevistados por la División de Investigaciones Criminales (*CID*), que tenía la responsabilidad de investigar incidentes fatales [en contra de presuntos terroristas].Tales oficiales permanecían con los soldados durante estas entrevistas así como preparaban las declaraciones de soldados que eran presentadas de forma rutinaria a las cortes tras consultar con los oficiales asesores judiciales del Ejército. El requisito de convencer a la corte que la cantidad de fuerza que emplearon era necesaria y razonable causó que las declaraciones durante la década de los 80 se asemejen entre sí a pesar de la confusión relacionada con algunas muertes."[32]

Un abogado principal del Ejército Británico destacó que "cuando un soldado disparaba, la impresión inicial no era la de 'Vamos a ver a de donde provino el tiro' sino '¡Dios mió! Ahora tendremos que someter un informe oficial al *DPP* [Director de Procesos Judiciales Públicos]. Alguien en la Cámara de los Comunes preguntará acerca de este incidente. Tenemos que formular respuestas correctas para poder informarles a los interrogadores furiosos que la policía ya está investigando minuciosamente.' ¡Qué manera de conducir una guerra!"[33] Por supuesto, el abogado sabía intelectualmente que no era una guerra.

A nivel internacional, los abogados solicitaron (mediante al Artículo 44 del Protocolo Adicional I de los Convenios de Ginebra) tratar a los detenidos "luchadores por la liberación" como *POW*. Por ende, permanecen en duda las afirmaciones del *IRA* en cuanto a demandar las protecciones de la ley humanitaria para detenidos. Sabemos que el trato al cual fueron sometidos violó la Ley Europea de derechos humanos pero no podemos sostener con certeza que la norma europea representa una norma internacional. Podemos confirmar sin duda alguna que los abogados, jueces, académicos y analistas de la prensa que han hacho comentarios acerca de las respuestas de las FF.AA. norteamericanas en la Guerra Mundial contra el Terrorismo han manifestado la existencia de una ignorancia abrumadora acerca de la experiencia británica. Finalmente, podemos concluir que la "guerra contra el terrorismo" es tal vez un término metafórico útil, pero no crea ninguna categoría legal útil.***MR***

NOTAS

1. Lady Wooton of Abinger, carta escrita a *The Times*, Número 59311, 15, col. E, 4 de febrero de 1975.

2. Resumido en el libro de Frank Kitson, *Low Intensity Operations: Subversion, Insurgency and Peacekeeping* (Londres: Faber & Faber, 1971). Véase también el de Robert Thompson, *Defeating Communist Insurgency: Experiences from Malaya and Vietnam (Studies in International Security)* (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2 de marzo de 1978). Mi narrativa histórica depende del libro de Desmond Hamill, *Pig in the Middle: The Army in Northern Ireland 1969-1984* (Londres: Methuen, 1985).

3. Republic of Ireland v. United Kingdom (Series A, No. 25), European Court of Human Rights (1979-80), 2, European Human Rights Report (EHRR) 25, 18 de enero de 1978.

4. Por más de una generación, se minimizaron las afiliaciones religiosas y las metas políticas que fueron enfatizadas en discusiones académicas acerca de enfrentamientos entre distintas facciones en Irlanda del Norte. Desde el 11-S, las afiliaciones religiosas otra vez han sido reconocidas como factores de motivación de violencia política. Los unionistas protestantes (Loyalists) quieren mantener la relación actual entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. Algunos miembros de la comunidad católica se caracterizan como nacionalistas y quieren una integración política con la Republica de Irlanda.

5. El Manual de Campaña (*Field Manual- FM*) 27-10 del Ejército de los EE.UU., *The Law of Land Warfare* (Washington, DC: Oficina de Imprenta del Gobierno de los EE.UU.[GPO], 18 de julio de 1956, Cambio 1, el 15 de julio de 1976), párrafo 11a.

6. "La ley de guerra es derivada de dos fuentes principales: a. Tratados para Formular Leyes (o Convenios), tal como La Haya y los Convenios de Ginebra. b. Costumbre. Aunque parte de la ley no se incorpora en cualquier tratado ni convención en que son partes los EE.UU., se estableció firmemente este grupo de leyes consuetudinarias mediante la costumbre de naciones y bien definidas por medio del reconocimiento de las autoridades de ley internacional" (Ibíd., párrafo 4).

7. Véase el Artículo Común 3 de los Convenios de Ginebra. Véase también el texto que acompaña la nota 17.

8. Que compare los procesos R. v. Thain [1985] 11 N.I.J.B. 31 (condena afirmada) con R. v. McNaughton [1975] N.I. 203 y R. v. Bohan and Another [1979] 5 N.I.J.B. (los acusados fueron absueltos).

9. Véase el libro de Yoram Dinstein, The *Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict* (Reino Unido: Cambridge University Press, 2004), págs. 119-23. Que compara la declaración de Lord Diplock en *Attorney General for Northern Ireland's Reference* [1976] N.I. 169 (comparar el rol del soldado con el del policía civil): "[Un] soldado que emplea el apoyo del poder civil en Irlanda del Norte tiene la obligación ejecutable de (bajo ley militar) de buscar criminales si le manda su superior y también arriesgar su propia vida si es necesario en prevenir actos terroristas. Para la realización de este deber, está armado con arma de fuego, un fusil automático que dispara balas que, si penetran un cuerpo humano, es casi seguro que causarían heridos graves o muerte.

10. Mark Urban, *Big Boys' Rules: The Secret Struggle against the IRA* (Londres: Faber & Faber, 1992), pág. 70.

11. Fionnuala ni Aolain, The Politics of Force: Conflict Management and State Violence in Northern Ireland (Belfast, Irlanda del Norte: The Blackstaff Press, 2000), pág. 125. Ni Aolain erróneamente declara que también se aplican los Protocolos I y II del Convenio de Ginebra de 1977. Sin embargo, nadie afirma que los Protocolos meramente restablecen la tradicional ley internacional que habrían obligado a Gran Bretaña a cumplir durante los años 70 ya sea que ratificara o no los protocolos. De hecho, Gran Bretaña no ratificó los Protocolos ni accedió a sus disposiciones hasta el 1998.

12. Albericus Gentilis, De Jure Belli (1588), citado en el libro de George Grafton Wilson, *Handbook of International Law*, 3d ed. (St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1939), pág. 253.

13. Existen cuatro Convenios del 12 de agosto de 1949: una "la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las FF.AA. en Campaña," T.I.A.S. 3362; la segunda "Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las FF.AA. en el Mar," T.I.A.S. 3363; la tercera "relativa al trato debido a los prisioneros de guerra," T.I.A.S. 3364; la cuarta "relativa a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra," T.I.A.S. 3365. Los EE.UU. las ratificaron y entraron en vigor en el 2 de febrero de 1956.

14. R.T. Yingling y R.W. Ginnane, "The Geneva Conventions of 1949," *American Journal of International Law 46* (1952): pág. 393.

15. El Tercer Convenio de Ginebra, Artículo 4.

16. *Ibíd*., Artículo 3.

17. El *IRA* no parece cumplir con el criterio que previeron los formuladores del Convenio. Véase el libro de Jean S. Pictet, editor, Commentary on Geneva Convention IV (Ginebra, Suiza: Comité Internacional de la Cruz Roja [ICRC], 1958), págs. 35-36.

18. [1973] N.I. 31. Debido a las limitaciones de mano de obra del Ejército, subsecuentemente se limitó la lista de sospechosos terroristas a 450. De estos, arrestaron a 346. Después de 48 horas, soltaron a 79. Encarcelaron a los 267 que quedaron en la cárcel de Crumlin Road en Belfast o un buque amarrado en la bahía Belfast Lough (Hamill, n. 4, págs. 57-61). Véase también el libro de Fergal Davis en "Internment without Trial: The Lessons from the United States, Northern Ireland & Israel" (no publicado, el autor retiene la copia), pág. 14. Davis ofrece números un poco diferentes: 342 arrestados y 116 sueltos en 48 horas.

19. El Parlamento aprobó la Ley cuando la guerra de guerrilleros por la independencia de Irlanda estaba llegando a su fin. Rechazó un desafío legal en contra de la Ley debido a la razón que los poderes otorgados fueron como los que fueron confirmados por otras cortes durante tiempo de guerra. Véase el proceso R. [O'Hanlon] v. Governor of Belfast Prison [1922], 56 I.L.T.R. pág. 170.)

20. Referente a los poderes de arrestar, véase el libro de Gerard Hogan y Clive Walker, Political Violence and the Law in Ireland (Gran Bretaña: Manchester University Press, 1989), pág. 47. Un oficial en servicio activo que era también un abogado mordazmente describió los problemas legales que el Ejército enfrentó en los principios de *The Troubles*. Fue obligado a retirarse después de publicar sus críticas (el TCnel. Robin Evelegh, *Peacekeeping in a Democratic Society* [Londres: Hurst, 1972]).

21. Hogan y Walker destacaron: "Después de 1972, el término la 'detención' reemplazó el 'internamiento' como la nomenclatura oficial. El Informe Diplock apoyó este cambio, pero el Informe Baker opinó que el término 'la detención' no era menos perjudicial. Asimismo, sobrepasa de manera confusa los poderes policíacos."

22. Andrew Harding y John Hatchard, editores, *Preventive Detention and Security Law: A Comparative Survey* (Los Países Bajos: Kluwer, 1993), pág. 10.

23. Véase el proceso de McElduff [1972] N.I.1; Jean S. Pictet, editor, *Commentary on Geneva Convention IV* (Ginebra: ICRC, 1958), págs. 35-36. Véase el proceso de Kelly v. Faulkner.

24. Se describe el proceso, parecido al que lentamente construyen los EE.UU., en el artículo de R.J. Spjut, "Executive Detention in Northern Ireland: The Gardiner Report and the Northern Ireland (Emergency Provisions) (Amendment) Act 1975," *Irish Jurist X* (1975): págs. 272-99.

25. A menos que se mencione lo contrario, a narrativa se basa en la obra de Hamill.

26. *Ibíd*., págs. 66-67.

27. John McGuffin, *The Guinea Pigs* (Londres: Penguin Books, 1974), en la Red: www.irishresistancebooks.com/guineapigs/guineapigs.html.

28. Véase el informe titulado Report of the Enquiry into Allegations against the Security Forces of Physical Brutality in Northern Ireland Arising out of the Events of 9th August, 1971, presentado al Parlamento por el Secretario de Estado para el Departamento Doméstico por el Comando (Command 4823) de Su Majestad, noviembre de 1971 (Gran Bretaña: Her Majesty's Stationery Office, 1971).

29. El gobierno británico lamentó haber otorgado el estatus de prisioneros políticos a los detenidos y prisioneros condenados de crímenes con motivación política y en eximirles de las regulaciones que obligan a prisioneros a trabajar. Los oficiales otorgaron a los líderes paramilitares, del *IRA* y (subsecuentemente) grupos terroristas protestantes el poder de controlar a sus partidarios, disciplinar, establecer sus propios programas laborales y realizar cursos en tácticas militares ("Loyalist and IRA leaders run compounds in Ulster Jail," *The Times*, 22 de febrero de 1973, 2C). La práctica de autogobernar de manera limitada bajo "representantes de los prisioneros" como previeron los Artículos 78-81 del Tercer Convenio de Ginebra, se acabó 3 años más tarde. Véase el artículo "Jail violence feared over ending of 'political status,'" *The Times*, 26 de febrero de 1976, pág. 4A.

30. Véase el proceso Republic of Ireland v. United Kingdom; Hamill. Véase también 2 EHRR 25 (1979-80).

31. Citado en Hamill, pág. 276.

32. Urban, pág. 75.

33. Hamill, pág. 167.

El Coronel (Retirado) Michael F. Noone, hijo, Fuerza Aérea de los EE.UU., es Profesor de Investigaciones en la Escuela de Ley Columbus, Catholic University of América, Washington, D.C. Recibió su licenciatura de la Escuela de Servicios Exteriores en Georgetown University, su Maestría y Doctorado en Derecho de la Escuela de Ley en Georgetown University. Asimismo, es graduado distinguido de la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Fuerza Aérea de los EE.UU. Sirvió en una variedad de posiciones de estado mayor en el territorio continental de los EE.UU., Gran Bretaña y Marruecos. En la primavera de 1991, fue profesor invitado en la Academia Militar de los EE.UU.